



Hagamos Ciencia

Una respuesta fraternal a los compañeros del proyecto *El genocidio en la Argentina*

Rosalía Rodas, Gonzalo Sanz Cerbino,
Eduardo Sartelli, Romina Urones

1. Una crítica injusta y una agresión gratuita

Una crítica injusta

El artículo “¿Por qué perdimos?”, publicado en el número anterior de **RyR**, ha motivado una serie de críticas, a favor y en contra. Desde quienes no se consideran parte del bando derrotado, aunque pertenezcan a agrupaciones de izquierda, hasta quienes participaron de los hechos y observan hoy su propio pasado críticamente o no. Los comentarios nos han llegado en variadas formas: correos electrónicos, charlas informales, discrepancias expresadas en público en mesas convocadas al efecto, etc., etc.. A todos les contestamos siempre lo mismo, además de defender nuestras posiciones: pongan las críticas por escrito y las publicamos en **RyR**. Nos resulta grato que un conjunto calificado de compañeros haya tomado en serio esa invitación y aportara el texto que puede leerse en este mismo número de la revista. Grato, porque se trata del grupo que con mayor seriedad ha estudiado temas relacionados con el problema planteado. Nadie mejor que ellos para hacer una crítica fundamentada. Un primer intercambio se produjo en ocasión de la presentación de la revista en el Centro Cultural de la Cooperación, el día 14 de abril del corriente año, en un debate que contó con la presencia de Pablo Bonavena y Jorge Altamira. Allí Bonavena hizo una serie de comentarios críticos, algunos de los cuales fueron retomados en el texto que firma ahora junto con los miembros del equipo del Programa de Investigaciones en Conflicto Social del Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. El intercambio continuó por correo electrónico con otros miembros del equipo (Flabián Nievas) y con su directora (Inés Izaguirre).

Con todo lo auspicioso que resulta debatir con compañeros particularmente calificados para ello, la crítica nos ha dejado un sabor amargo, por lo injusta. Los compañeros que nos cominan a respetar el trabajo ajeno y hacer historia, parten de eludir ellos mismos esas tareas. Al hacerlo, actuando con una agresividad digna de mejor causa, no sólo relegan al olvido un esfuerzo notable de divulgación y defensa de *sus* posiciones por *nuestra* parte, sino que, lo que es peor, con una actitud que sólo puede calificarse de soberbia, nos tratan de ignorantes. El “equipo de jóvenes historiadores del CEICS-RyR” tratará en este texto de aportar al debate en lo sustantivo,



esquivando mezquinas cuestiones de cartel, más propias de la farándula revisteril que del debate científico. No puede, sin embargo, dejar pasar la injusticia.

Los autores nos recomiendan “conocer todo lo que ya se ha investigado y publicado sobre un problema antes de ponerse a investigar”. Aunque el equipo de Izaguirre no es el único que ha escrito sobre el asunto, el argumento destila resentimiento por un supuesto “desconocimiento” de sus propios trabajos. Veamos.

Desde que **RyR** existe, ha puesto particular atención a toda la tradición científica a la que los autores pertenecen, a la que denominaremos, por comodidad, la “tradición CICSO”. Y ello en buena medida porque en el ámbito de la historia, en el que la revista nació, dicha tradición, producto de sociólogos, era y es “ninguneada”. Ha sido un enorme esfuerzo militante difundir su tarea en el mundo hostil de los historiadores socialdemócratas que domina Filosofía y Letras, pero por las páginas de **RyR** han pasado Nicolás Iñigo Carrera, Beba y Beatriz Balvé, Inés Izaguirre y Juan Carlos Marín. Con excepción del último, el resto en más de una ocasión.¹ En el caso particular de Inés Izaguirre, la relación fue más allá de la publicación de sus trabajos, ya que constituyó una referencia obligada cada vez que iniciamos una investigación sobre algún tema que ella domina, como en el análisis de Gramsci sobre los partidos políticos², o el que hoy nos convoca. Izaguirre parece no recordar que el artículo que nos critica parte de su propia investigación, tal como puede comprobar cualquiera que lea la cita 4 de página 7.

La defensa de los trabajos y las posiciones “cicsistas” motivó incluso la edición de un dossier dedicado a CICSO y su trayectoria, que apareció en el número 6. Dossier que fue elaborado en conjunto por Eduardo Sartelli y Agustín Santella, que parece haber olvidado hoy su paso por **RyR**... Allí mismo pueden verse textos de Marín, Izaguirre, Balvé, Iñigo Carrera, Agustín Santella y Flabián Nievas. Pablo Bonavena no publicó nada porque no quiso, pese a nuestras

¹Véanse en **Razón y Revolución**: de Inés Izaguirre, “La política de la memoria y la memoria de la política”, nº 4, otoño de 1998; “Perfil social de los asalariados desaparecidos”, nº 6, otoño de 2000; (et al.) “Hagamos historia. Respuesta a ¿Por qué perdimos?”, nº 12, verano de 2004; de Nicolás Iñigo Carrera: (et al.) “Los grupos sociales fundamentales en la Argentina. La situación del proletariado”, nº 2, primavera de 1996; “Documentos para la historia del Partido Socialista”, nº 3, invierno de 1997; “El problema indígena en la Argentina”, nº 4, otoño de 1998; “La investigación en historia”, nº 5, otoño de 1999; “Qué historia y qué militancia”, nº 7, verano de 2001; “La estrategia de la clase obrera”, nº 6, otoño de 2000; (y María Celia Cotarelo) “La protesta en Argentina”, nº 8, primavera de 2001; (y María Celia Cotarelo) “Quién es el sujeto”, nº 11, invierno de 2003; de Beatriz Balvé: “¿La fusión del arte y la política o su ruptura?”, nº 7, verano de 2001; de Agustín Santella: “Desarrollos en Ciencias Sociales”, nº 6, otoño de 2000; “Para el análisis de las confrontaciones. Sobre el caso Villa Constitución (Argentina, 1975)”, nº 8, primavera de 2001; “Las luchas de la clase obrera en los orígenes del peronismo en la Argentina”, nº 9, otoño de 2002; “Los setentas y el movimiento clasista en la Argentina. Una crítica a la tesis de Cangiano”, nº 11, invierno de 2003; de Beba Balvé: (y equipo CICSO): “Lucha de calles, lucha de clases. Insurrección popular e insurrección proletaria”, nº 8, primavera de 2001; “El desarrollo del capitalismo en la Argentina”, nº 6, otoño de 2000; de Juan Carlos Marín: “La noción de polaridad en los procesos de formación y realización del poder”, nº 6, otoño de 2000; de Flabián Nievas: “Cara y ceca. Las tomas de Medios de Difusión Masiva durante el gobierno de Cámpora”, nº nº 6, otoño de 2000.

²“Gramsci, la vida histórica y los partidos. En busca de una teoría marxista de la política”, en **Razón y Revolución** nº4, otoño 1998.



reiteradas insistencias, anteriores y posteriores a ese dossier. En la introducción de Eduardo Sartelli se explica claramente las razones de nuestro “giro” desde posiciones thompsonianas a una orientación “cicsista”:

“...en el ámbito de la historia, contra el thompsonismo en cualquiera de sus fases, es que, creo, puede examinarse la tarea del CICSO: como escuela de análisis de la lucha de clases que explica trayectorias históricas a partir de determinantes estructurales rescatando como eje de la investigación la lucha y la formación de los sujetos en la dialéctica compleja entre unas y otras. Espero que este dossier ayude a la tarea de recuperar lo que (...) puede ser reconocido como “marxismo clásico”, es decir, como ciencia social sin más, como Historia.”³

En esa oportunidad (2000) el trabajo de CICSO nos parecía la más interesante de las “tradiciones” marxistas a mano y una de las posibles vías de superación del thompsonismo. En otras palabras, representaba (y representa) para nosotros una “tradición” que surge de y para el estudio de la historia argentina, razón más que válida para brindarle un lugar destacado en nuestras publicaciones.

Ésa es la razón, también, por la que recomendamos su producción en cada ocasión que podemos. De hecho, la producción “cicsista” llegó a varias cátedras de Filosofía y Letras de la mano de **RyR**. La cita textual y la recomendación explícita están testimoniadas en todas las charlas y cursos que hemos dado en cuanta asamblea popular, sindicato o merendero nos invitara, tal como puede verse en *La plaza es nuestra*, libro editado con la Asamblea de Plaza Congreso en el 2003. Allí hay testimonio no sólo del reconocimiento a toda la tradición CICSO, sino en particular a Juan Carlos Marín, Inés Izaguirre y los miembros de su equipo.⁴ Esa tarea de defensa y divulgación se extiende hoy en un hecho que nos llena de orgullo: la reedición, por nuestra editorial, a nuestro costo y sin ganancia alguna, de los “clásicos” más importantes de la tradición cicsista: *Lucha de calles, lucha de clases* y *El 69*.

Cualquier investigador que esté al tanto de lo que hacemos y de lo que somos, no podría negar que conocemos perfectamente la serie de trabajos que produjo CICSO y, con ellos, a los intelectuales que realizaron esos trabajos. En particular a quienes hoy nos atacan de una manera que consideramos, por decirlo suavemente, injusta. Cabría preguntarse aquí, el trabajo de quiénes ha sido ignorado...

Una agresión gratuita

³Sartelli, Eduardo: “Introducción (larga) para historiadores”, en **Razón y Revolución**, nº 6, otoño 2000.

⁴Véase Sartelli, Eduardo: *La plaza es nuestra*, Ediciones RyR, Bs. As., 2003, páginas 132-134



El peor resultado de la agresión es que se desmiente a sí misma, porque nuestra investigación parte de los mismos resultados de quienes nos critican, citados explícitamente. La idea de que no conocemos una obra que no sólo editamos sino que reconocemos como nuestro punto de partida, se invalida sola. Lo que parece que los compañeros no pueden entender es que, conociendo su obra, no estemos de acuerdo con sus conclusiones. Sobre todo, con las respuestas que creen haber dado a problemas que nunca se plantearon. Porque ése es el núcleo del problema: ni los investigadores que nos critican ni la producción a la que apelan para cubrir un vacío más que obvio, se han planteado explícitamente el problema de las causas de la derrota. No aparece en el trabajo del que partimos ni en otros textos de los mismos investigadores, ni siquiera en el texto canónico de Marín.⁵

Es necesario aclarar este punto. Los trabajos de Izaguirre se plantean el problema de la naturaleza del genocidio, su razón de ser y, a partir de allí, indagan a quiénes se asesinó y por qué. No se pregunta, en ningún momento por la razón de la derrota ni esa inquietud es el punto de partida de su trabajo, sino más bien sus consecuencias, tal como se puede confirmar en la crítica a nuestro trabajo. Tampoco llena ese bache el relato de Bonavena, Nievas et al., en el que se *describe* el proceso de lucha de clases pero no se lo *explica*.⁶ Algo parecido sucede con *Los hechos armados*, texto que constituye la matriz interpretativa de todos los posteriores. Marín no se plantea explicar la derrota, sino develar el proceso social que se esconde tras los hechos armados, con la función de mostrar la existencia de una guerra. En el desarrollo de esa tarea, Marín ofrece, como subproducto, una respuesta a la pregunta por el fracaso: la superioridad subjetiva de la fuerza del régimen. En el momento en que la lucha de clases alcanza su estadio militar, la fuerza del régimen estaba preparada para la tarea mientras la fuerza revolucionaria se encontraba en un estadio anterior, el del armamento. Lo que Marín no hace es explicar la causa de ese retraso subjetivo en la fuerza revolucionaria, lo que torna incompleta su respuesta. En última instancia, Marín sólo constata la derrota, porque decir que perdimos porque jugamos mal no nos hace avanzar mucho. Volveremos sobre este punto más adelante.

Nosotros partimos de ese resultado que, con sus límites, constituye un avance clave: preguntarnos por qué perdimos un partido que no se jugó jamás, hubiera sido ridículo. El aporte de Marín permite plantearse el problema, porque el hecho existió: hubo una guerra, alguien ganó y alguien perdió. Ese resultado preside la investigación de varios de nuestros grupos de trabajo, desde el de historia de la izquierda, hasta el de economía, pasando por el de procesos de trabajo y

⁵La única cita que hace alusión al estudio de las causas de la derrota, aparece al pasar en Izaguirre, Inés y Zulema Aristizábal: *Las luchas obreras 1973-1976*, Documento de trabajo nº 17, Instituto de Investigaciones Gino Germani, FCS, UBA, Bs. As., 2000, p. 2. El texto, sin embargo, no ofrece ninguna respuesta y habla, en realidad, de otra cosa (véase comentario más adelante).

⁶Bonavena, Pablo, Mariana Maañón, Gloria Morelli, Flabián Nievas, Roberto Paiva, Martín Pascual: **Orígenes y desarrollo de la guerra civil en la Argentina, 1966-1976**, Eudeba, 1998.



éste desde el cual escribimos ahora. Porque la pregunta no tiene una respuesta simple y no puede extraerse sólo del análisis sociológico. Menos cuando éste puede ser cuestionado en sus propias bases empíricas.

2. Las bases endebles de una investigación

Explicábamos en nuestro artículo que, para contestar a la pregunta ¿por qué perdimos? era necesario conocer, entre otras cosas, la composición de clase de las fuerzas que se enfrentaron en los ´70. Por eso, nuestro objeto de estudio son las fuerzas sociales que fueron parte del enfrentamiento, aunque en la actualidad nos limitamos al análisis de la fuerza derrotada, dejando para más adelante el de la fuerza triunfante. Fue precisamente este punto el origen del debate. Lo sorprendente es que los compañeros hayan optado por no continuarlo, dedicándose a ejercicios de paternidad rencorosa. Omiten el eje de la discusión, que era la composición de clase de la fuerza revolucionaria.

Al comenzar la investigación partimos de un dato que dábamos por bueno, extraído de uno de los textos de Izaguirre: la pequeña burguesía estaba sobre-representada en la fuerza social revolucionaria, al menos tal como se desprendía de la contabilidad de bajas en la forma de “desaparecidos” hecha por Izaguirre y su equipo. Si uno sumaba las bajas de la fuerza revolucionaria que aparecían bajo la forma de pequeña burguesía independiente y asalariados con condiciones de vida de pequeña burguesía, obtenía un total cercano al 60%. Si se suponía que la categoría 4 (asalariados con condiciones de vida de pequeña burguesía) incluía sólo la mitad de pequeña burguesía y el resto de obreros, la cifra bajaba, pero el predominio pequeño burgués se mantenía, siempre comparando su peso en las bajas con su peso en el conjunto de la sociedad. ¿A qué se debía esa disparidad? Dos hipótesis se nos ocurrían posibles. La primera: el grado de desarrollo de esa fuerza era muy embrionario y no había llegado a incorporar masivamente cuadros de clase obrera. La segunda: los registros de desaparecidos subestiman las bajas obreras. Pueden formularse varias hipótesis más, pero preferimos limitarlas a estas dos. Optamos por la última y nos dispusimos a “buscar” obreros no denunciados como desaparecidos, punto en el que nos encontró el debate.

Efectivamente, el debate giró en torno a la categoría 4 del cuadro en el que Izaguirre busca describir la composición de clase de los desaparecidos y, a partir de allí, de la fuerza social de la que formaron parte (véase el cuadro más adelante). Nosotros interpretamos que esa categoría incluía tanto obreros como pequeña burguesía, mientras que Izaguirre y Bonavena incluían a todos los participantes en la clase obrera. De esa manera, la interpretación divergente da lugar a dos resultados distintos: si nosotros tenemos razón, la pequeña burguesía aparece sobre-



representada, lo que nos vuelve al punto de partida. Si la razón está de su lado, el problema desaparece y ninguna de las hipótesis tiene sentido.

Nuestros oponentes nos acusan de “obrerismo”, de falta de rigor teórico y de desconocimiento de consideraciones metodológicas elementales. A nuestro juicio, *de te fabula narratur...* Para demostrarlo, partiremos del análisis de las categorías utilizadas por Izaguirre y equipo, para luego revisar algunas cuestiones metodológicas.

a. Categorías

Asalariado-clase obrera

Al comenzar nuestra investigación, considerábamos un aporte importante al esclarecimiento de nuestras dudas. el trabajo ya realizado por Inés Izaguirre sobre la construcción y ruptura de una fuerza social de carácter “popular”. Junto a ella trabajó un equipo de investigadores con quienes armó el proyecto de investigación *Los desaparecidos: significado social de una política de aniquilamiento*. En este texto, Izaguirre publica el siguiente cuadro en página 48:

Inserción ocupacional de los prisioneros desaparecidos y de la población económicamente activa en Argentina en 1970 y 1980				
Aproximación a fracciones de clase social	Categorías y grupos ocupacionales que se incluyen en cada nivel	Proporciones de población en		
		PEA 1970	PEA 1980	PDD
Fracciones de burguesía 1	Empresarios grandes	5,6	0,7	
	Empresarios medianos y chicos		4,0	3,2
Fracciones de burguesía y pequeña burguesía independiente	Profesionales universitarios, altos directivos, funcionarios	8,8	4,1	13,0
	Trabajadores por cuenta propia urbanos y rurales y ayuda familiar	13,2	21,8	16,6
Idem 3				



Fracciones asalariadas con condiciones de vida de pequeña burguesía 4	Asalariados de servicios urbanos calificados, técnicos	21,4	22,5	32,5
Fracciones asalariadas con condiciones de vida obrera 5	Obreros industriales y de servicios urbanos y rurales	50,8	45,9	34,7
Totales	Población económicamente activa	100 9.011.000	100 10.000.10 0	100 (*)

(*) La muestra total es de 674 casos de prisioneros desaparecidos denunciados (PDD), de los cuales incluyen información ocupacional 403 casos, sobre los que hemos construido la comparación. Dicha muestra representa el 11% de los testimonios de denuncias efectuadas antes del gobierno constitucional. No se han incluido en la comparación 54 casos de no activos (amas de casa, jubilados y estudiantes) a fin de facilitar la comparación con la PEA. Esos casos –8% del total de la muestra- deben sumarse a los 217 casos sin datos sobre posición social, lo cual hace un total de 271 casos, o sea el 32% de la muestra.

Aquí se puede observar que las “fracciones asalariadas” (categorías 4 y 5) representan el 67,2% de los “prisioneros desaparecidos denunciados”. El resto de las fracciones burguesas cuentan con el 32,8% de los desaparecidos. Este registro de bajas coincide, según Izaguirre, con los datos que arroja el registro de la PEA, en los cuales aparece la fracción asalariada representada en un 72,2% y las fracciones de pequeña burguesía y burguesía en un 27,6%. Por lo que estos datos no darían pie nuestra hipótesis acerca de la sobre-representación de la pequeña burguesía en las listas de desaparecidos, así como la falta de denuncias sobre bajas obreras.

En el intercambio, que tanto Izaguirre como Bonavena prefirieron olvidar, sostenían que “asalariado” no es igual a “obrero”, ya que la PEA coloca como “asalariado” a todo aquel que perciba un salario (un gerente de banco, un presidente de directorio de multinacional, por ejemplo). Por lo tanto, no puede utilizarse “asalariado” como sinónimo de obrero. Cualquiera sabe que esto es el abc de la investigación con este tipo de fuentes. Precisamente por eso, nosotros concluimos lo que era lógico: que no todos los desaparecidos que figuran en la categoría 4 eran obreros. Y que, como consecuencia, sumar las categorías 4 y 5 para obtener “clase obrera”



está mal. Por eso, en nuestro artículo (mucho antes de que los compañeros tuvieran la “amabilidad” de enseñárnoslo) otorgamos a la pequeña burguesía un peso mucho mayor, presuponiendo que una parte importante de la categoría 4 podía ser pequeña burguesía asalariada. Paradójicamente, cuando los compañeros notan el resultado lógico de su propio trabajo, dan marcha atrás con la “enseñanza” y ahora resulta que todos los asalariados son obreros. Ahora el argumento es que somos obreristas incurables y creemos que si alguien no viste “mameluco” no es obrero. Un absurdo, porque la categoría 5, a la que nosotros reconocemos como “obreros”, explícitamente incluye a personajes que no visten “mameluco” y porque en nuestra cuenta incluimos a parte de la categoría 4, más alejados todavía del mundo fabril.

Buena parte del problema se suscita porque nuestros críticos utilizan terminología confusa. Como nosotros sabemos (sin necesidad que nos lo vengan a explicar) que “asalariado” no es lo mismo que “obrero”, donde alguien describe “asalariados con condiciones de vida obrera” tendemos a creer que se trata de obreros, aunque bien puede no ser el caso (puede tratarse de pequeña burguesía pobre). Pero cuando se describe “asalariados con condiciones de vida de pequeña burguesía”, tendemos a dudar. Por aquello de “si camina como pato, vuela como pato...”. Si hubieran querido que se entendiera que eran obreros deberían haber descripto las categorías 4 y 5 como obreros, con condiciones de vida de pequeña burguesía o con condiciones de vida obrera. Es decir, en algún lado del texto debieran haberlo señalado claramente. Pero cuando uno utiliza la categoría “asalariado” es porque no está seguro de que todos los que se incluyen allí sean obreros. Incluir a todos los asalariados como obreros presupone que no existen ni burguesía ni pequeño-burguesía asalariadas. Un error cuyas consecuencias no pueden medirse a menos que, metidos en el interior de la categoría, describamos con mayor precisión las ocupaciones que la integran.⁷ La descripción que hace Izaguirre no ayuda mucho (“Asalariados de servicios urbanos calificados, técnicos”: ¿por ejemplo?) Bastaría con que hubiera un número relativamente importante de maestros y profesores de secundario para que la cuenta dé algo muy diferente (que es lo que finalmente ocurre, como veremos). De hecho, la propia Izaguirre acepta que, efectivamente, nuestra caracterización de la fuerza no estaba mal: “En relación a la estructura social general esta fuerza estaba sobrerepresentada en aquellas fracciones de pequeña burguesía acomodada (grupo 2), y de asalariados urbanos con mayores niveles de calificación (grupo 4), que indican sin duda niveles de instrucción más altos.” (p. 47). Nosotros no hicimos otra cosa que preguntarnos la razón de esta “sobre-representación”...

Pequeña burguesía (estudiantes, maestros, profesores y profesionales)

⁷Véase Iñigo Carrera, Podestá, Fernández: “Situación de los grupos sociales fundamentales en la Argentina. El proletariado”, *Razón y Revolución*, n °2, primavera 1996, cita 11, pp. 4. En este texto, los autores asimilan asalariado a clase obrera, porque al nivel de la PEA, la diferencia es despreciable. No sucede así en la contabilidad de desaparecidos.



Retomando el trabajo de Izaguirre, decíamos que, a la hora de contabilizar a la pequeña burguesía, existían algunos problemas. En primer lugar ¿qué son los “asalariados de servicios urbanos, calificados y técnicos”? Las personas que trabajan en servicios urbanos, calificados y los técnicos bien pueden ser clasificados como “pequeña burguesía”. Por ejemplo, los maestros, los profesores, los ingenieros y, como veremos, la masa de los estudiantes. Todo depende cómo se defina a la pequeña burguesía.

Un obrero es aquel que no posee medios de producción *ni de vida* y que por lo tanto, se encuentra a merced del mercado. Alguien que reproduce su vida mediante la caza y la pesca para la auto-subsistencia o con alguna participación marginal en el mercado, no posee medios de producción, pero sí posee medios de vida. Por lo tanto, no es obrero. Por su parte, pequeño burgués es todo aquel que posee medios de producción en una escala que le permite vivir de su trabajo o de su trabajo y del trabajo ajeno, pero nunca exclusivamente del trabajo ajeno. Debe participar de la producción pero no es explotado, aunque puede ser un explotador al menos parcialmente. Hay muchos medios por los cuales se puede conseguir este status. El más sencillo es el del pequeño propietario (de taller, de comercio, de tierra). Pero también pertenecen a la pequeña burguesía los profesionales “liberales”, para quienes su educación y algunas condiciones materiales, como el consultorio o cierto tipo de apartos (y su pericia personal, el “prestigio”) constituyen medios de producción: médicos, abogados, veterinarios, arquitectos, ingenieros, contadores, etc.. También se accede a la pequeña burguesía siendo parte de una familia que se reproduce de tal modo, incluso cuando el miembro de la familia no titular trabaja en forma asalariada, incluso cuando trabaja en una fábrica. Es el caso de los estudiantes universitarios y de los docentes de los años ’60, reclutados mayoritariamente en el seno de la pequeña burguesía. Es necesario entender con claridad este punto: ser obrero significa carecer de medios de producción y de vida, lo que condena a la persona a depender exclusivamente de su fuerza de trabajo para reproducirse. Un estudiante o una maestra que pueden en cualquier momento dejar de trabajar apoyándose en su estructura familiar pequeño-burguesa, sin que ello ponga en peligro su reproducción, no son obreros. Su dependencia del mercado, su existencia como fuerza de trabajo, no es el resultado de una expropiación sino de una elección. Un estudiante “proletarizado” que termina siendo delegado de una fábrica, no es un obrero. El problema para Izaguirre y compañía es que los estudiantes son el 22% de los desaparecidos, de modo que, según trate uno a ésta categoría, el resultado puede cambiar.



Mencionábamos más arriba que nuestro problema central a resolver es *la composición de clase* de las fuerzas que se enfrentaron en los '70. Sin saber cómo estaban compuestos los equipos, es difícil saber por qué uno de ellos perdió y el otro ganó. Pero ¿qué es una *fuerza social*? Las fuerzas sociales representan alianzas de clases, con relación a intereses de clases y expresan distintos momentos de la lucha de clases. Es decir, al momento de la lucha, no se enfrentan las clases en estado puro, sino que se enfrentan “fuerzas” que se unen de acuerdo a intereses comunes. Sin embargo, para nuestros críticos, fuerza social es equivalente al para sí de las clases, según reza en “Hagamos historia”: “la clase “para sí” es la articulación de fracciones de distinto origen social, que se alinean juntos en la lucha, en una misma *fuerza social*. ” Así, una fuerza social revolucionaria es el para sí de la clase obrera. De donde se deduce que son obreros todos los que forman parte de una fuerza social revolucionaria, en tanto que una clase sólo se convierte en tal cuando se da un “para sí”. Surgen aquí dos problemas: primero, si una fuerza social es una alianza de fracciones de clase, entonces no puede resultar en una clase; segundo, si los miembros de otras fracciones que se incorporan a la alianza desaparecen tras el para sí obrero, deja de haber alianza. Una pista para resolver este intríngulis puede encontrarse en la recomendación que nos hacen del *Qué hacer*, de Lenin (que “fue un revolucionario, que además hizo una revolución”). Los compañeros parecen ignorar que en ese texto Lenin discute no sobre la conformación de una fuerza social sino de la construcción del *partido*. Precisamente, la dimensión del partido es la que está sistemáticamente ausente de la reflexión sobre el proceso revolucionario. Y de hecho, el intríngulis se resuelve aquí: los compañeros confunden fuerza social con partido. El partido revolucionario no es una alianza, aunque puede expresarla. En un partido confluyen, efectivamente, como Lenin bien lo señala, personajes de diferente procedencia. Normalmente, el proceso de formación del partido procede de la siguiente manera: un conjunto de aspirantes a generales de estado mayor provenientes de la alta burguesía, la pequeña burguesía y hasta de la aristocracia feudal, sin contacto firme con la clase obrera, se nuclea tras un programa. En una tarea de lucha teórica, propaganda y agitación, suelen incorporarse cuadros provenientes de la pequeña burguesía (en particular estudiantes), que forman el grupo de “hombres medios” como señala Gramsci. A ese ejército de oficiales sin tropa le resta aún la tarea de reclutar amplias masas obreras, de las cuales extrae sus cuadros sindicales, barriales, etc. Recién en ese momento la clase obrera comienza a entrar al partido. Hasta ese momento, el partido es sólo una voluntad *teóricamente* colectiva, un programa escrito, una constitución sin soberanía. La estrategia y las tácticas que ese personal político se dé para ligarse a las masas obreras es lo que definirá su suerte como tal. Por otro lado, el partido también comienza a construirse por abajo: destacamentos obreros particularmente avanzados comienzan a darse tareas de partido, a reclutar intelectuales provenientes de otras clases o a promoverlos desde su propio seno, a fin de darse una estructura, primero que nada bajo la forma de apoyo técnico (abogados, médicos, curas) que



“van a la villa” a conectarse “con la gente”. Tarde o temprano, la lucha misma obliga a estos destacamentos obreros a construir una estructura permanente, dividir el trabajo político y promover funcionarios profesionales. Este desarrollo se produce en medio de la lucha de clases y atrae cuadros políticos que pertenecen a otras clases sociales. En ese proceso, ese personal proveniente de otras clases se *fusiona* con el proletariado, es decir, adopta su programa y sus intereses. Por eso, un partido es un conjunto de cuadros en donde han desaparecido las diferencias de clase de procedencia por la común dedicación a un programa. A eso se refiere Lenin.

Por el contrario, una alianza de clases no procede por fusión, sino por ligazón. Los miembros de la alianza no abandonan sus intereses particulares, todo lo contrario: ellos son los que dan sentido a la alianza. Por eso, dentro de toda alianza hay disputa por la conducción. Por esa razón, el partido revolucionario, el partido orgánico del que habla Gramsci, puede establecer alianzas pero no es él mismo una alianza. Por eso, una alianza nunca puede constituir el para sí de una clase porque no es una clase. No sorprende ahora, en torno a esta confusión, que los compañeros consideren obreros a todos los que participaban de esa fuerza social. Lo que sorprende es que se preocupen por el origen de clase de sus miembros o que necesiten probar que la mayoría era obrera.

Quedándose en el nivel de fuerza social, el análisis resulta incompleto porque el proceso no se detiene en la formación de una fuerza. Desde arriba o desde abajo, la misma lucha de clases va forzando a los participantes a organizarse y sacar las conclusiones necesarias del sentido de sus luchas. Cada una de las clases de la sociedad aporta fracciones a la alianza que comienza a formarse y expresarse como fuerza social. Pero esta fuerza social todavía debe darse una conducción, un partido. Porque la existencia de alianzas no significa nada: depende de qué alianzas, con la dirección de quién y con qué programa. Y todo ello debe corporizarse en un personal político que, producto de una intensa lucha teórica, expresión a su vez del éxito o el fracaso de los programas que se postulan como síntesis de la voluntad colectiva de esas alianzas, toma forma de funcionariado dirigente. Un personal que normalmente proviene de los partidos más diversos, aunque suele tener un núcleo duro proveniente del más afortunado de todos aquellos que se disputaban la dirección. Este proceso puede seguirse y los resultados de su estudio arrojan mucha más luz sobre el por qué de los éxitos o fracasos que el examen limitado al nivel de fuerzas y alianzas.

El hincapié en el concepto de fuerza social, resulta particularmente útil para evadir la discusión política del problema. Hablar de fuerzas sociales sin entrar en la discusión político-partidaria, es la mejor forma de mantenerse al margen de la lucha política propia de la posguerra y, en más de



una ocasión, de caer en el campo enemigo.⁸ Por el contrario, sostenemos que el estudio de la lucha de clases no consiste en el proceso de formación, ascenso y triunfo (o aniquilación) de alianzas, sino en el proceso de formación, ascenso y triunfo (o aniquilación) de partidos. Porque así como las clases no actúan directamente en la realidad como tales clases sino a través de alianzas, tales alianzas no se expresan sino a través de partidos. La necesidad de la centralización partidaria es la clave del comando unificado de la lucha y, por lo tanto, un requisito para triunfar. No hay revolución sin partido. En ese sentido, convendría a los compañeros releer el *Qué hacer...* Ahora bien, según plantean los investigadores del instituto Gino Germani, “una fuerza social, no es revolucionaria según contenga más o menos obreros, sino según cuántos cuadros y destacamentos van tomando conciencia revolucionaria.” Una chicana tonta que podrían haberse ahorrado. La discusión no es si había pocos obreros o no, sino en qué momento de su formación estaba el partido revolucionario. Y un partido revolucionario que no ha logrado insertarse en las masas obreras, sencillamente no es un partido revolucionario sino, en el mejor de los casos, un personal político que tiene tales pretensiones. Precisamente, lo que faltó en los ’70 es el partido revolucionario. O mejor dicho: la principal debilidad de esa fuerza social revolucionaria era que tenía demasiados partidos y que la lucha en su seno estaba muy lejos de zanjarse a favor de uno de ellos. Indagar por qué es la clave. Ignorar esta problemática, quedándose en un estadio anterior del proceso impide cualquier reflexión seria. Aunque en su respuesta los compañeros parecen admintirlo, en los textos de Izaguirre y Bonavena la descripción parece ser otra: una fuerza notablemente implantada en la clase obrera, con una enorme militancia y que provoca, como veremos más adelante, alineamientos a su favor de parte de casi todo el mundo.

Siendo, entonces, el partido el final del proceso, no entender las etapas de su construcción nos retrotrae a una mirada positivista de la lucha de clases. Una simple descripción que nada explica. Pero, aun si nos limitamos al nivel de fuerza social, no preguntarse si esa fuerza contiene una mayoría de clase obrera, implica pensar que la revolución socialista puede ser llevada adelante sin su presencia. Un voluntarismo idealista que termina necesariamente en sustitucionismo: el personal político que se postula como partido se pretende toda la fuerza necesaria. ¿No está aquí el error estratégico del PRT que el mismo Marín le achaca, en ocasión de continuar la lucha armada contra el ejército mientras las masas votan a Perón? ¿Pero no se encuentra ese error en la confusión acerca de las tareas necesarias del período, que privilegió la construcción del aparato armado por sobre la inserción del partido en las masas? Contradicторiamente, Marín afirma lo primero mientras niega lo segundo. No es extraño, está en su concepto mismo de revolución. No

⁸Como perfectamente puede verse en la edición 2003 (no 2004, como se equivocan nuestros críticos...) de *Los hechos armados* que nos recomienda Izaguirre et al., donde Marín termina transformándose en un buen demócrata burgués. Véase, sobre todo, el apéndice “Luchar”, donde se nota qué lejos ha quedado hoy el autor de las posiciones de 1975.



hay lugar aquí para continuar esta discusión acerca de la vía revolucionaria y el problema del armamento del pueblo, punto que dejamos para otra ocasión.

No se trata de “obrerismo” sino de simple “realismo”: la revolución es un hecho de masas, no de minorías. Porque al poder concentrado de la burguesía en su estado, sólo puede oponerse el poder de masas organizadas. No se trata de un “esencialismo” revolucionario propio de los obreros, sino de que sin los grandes batallones de la clase obrera no puede triunfarse de ninguna manera. Salvo que uno se crea el mito del guerrillero heroico que se mete en la selva y surge triunfante para “liberar” a las masas. O que se crea otro mito, el de “nuevos sujetos” revolucionarios que sustituirían a la clase obrera: el lumpemproletiado (Fanon); los estudiantes (Marcuse), etc., etc.

Este razonamiento nos permitiría pensar que si los cuadros políticos que aparecen denunciados en las listas de desaparecidos, son pertenecientes, en su mayoría, a la pequeña burguesía, estaríamos ante el utópico deseo de concretar una revolución que no contaba con el apoyo de la fracción mayoritaria de la sociedad. En este caso no importaría cuántos cuadros o destacamentos tomen conciencia revolucionaria, pues el grueso de la población, la masa que logra paralizar el país, no comparte la causa. Y no es una cuestión de “obrerismo”. Significa simplemente analizar con qué fuerzas reales contaba la alianza revolucionaria. En este sentido, una lectura de *Historia de la Revolución rusa*, de Trotsky (que también hizo una revolución...), no vendría mal. Releer las conclusiones de Marx (que no hizo ninguna revolución) sobre la Comuna de París, tampoco.

Genocidio

Como intentamos demostrar, las categorías con las cuales entendemos los procesos sociales revisten la mayor importancia. Una mala categorización lleva a (y es producto de) errores graves. La más peligrosa es, quizás, la de “genocidio”. Utilizado para definir “la matanza que sobrevino luego de la derrota, cuando las fuerzas social contrarrevolucionaria se fija como meta el exterminio del enemigo”, el concepto esconde más de lo que devela.

En primer lugar, el concepto de “genocidio” refiere a un objeto que sufre una determinada acción, sin importar la razón o el modo por el cual se produzca. Ese objeto es un “pueblo”, como extensión de “gens”: familia, linaje, raza. El diccionario Larousse aclara: “exterminio de un pueblo por motivos de raza o religión”. Aclaración inútil, porque si se exterminara un pueblo por alguna otra razón (económica, política) seguiría siendo un genocidio. El concepto remite a un objeto (“pueblo”) y a una acción (“exterminio”). Bajo esta definición podemos mencionar como ejemplos la eliminación de los pueblos indígenas por la “Campaña al desierto” de Roca, el



exterminio del pueblo judío, durante el nazismo o el genocidio armenio.⁹ Pero de ninguna manera puede aplicarse al caso argentino, donde lo que sucede es el aniquilamiento de los cuadros de una fuerza social de matriz clasista. No hubo ni “pueblo” ni “exterminio”. Hubo alianza de clases revolucionaria sin partido dirigente y aniquilamiento *de los cuadros dispersos* de esa fuerza. Contradicoriamente, nuestros críticos mismos dudan del valor de la categoría en el mismo texto en el que nos atacan:

“Aún así, consideramos que es importante tener en cuenta que el término “genocidio”, como ya se expresa en su etimología, posee un *contenido sustancialista* en relación con el móvil de la matanza, que oscurece la matriz político-ideológica y de clase del proceso al que hacemos referencia. Cabría decir que no sólo la etimología tiende a oscurecer la matriz política de la matanza, sino que existen posturas político-ideológicas hegemónicas que tienden a reproducir y reafirmar el contenido sustancialista de la noción.”

La definición oficial que toma el equipo de investigadores del Instituto Gino Germani, es la del diccionario de la Real Academia Española, en su 21º edición de 1992: “exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de religión o de política.” Incluso, parece insinuarse que esta definición es mejor que la de la ONU, que no incluye entre los motivos, el “político”. ¿Habría que “luchar” porque la ONU reconozca esta definición ampliada, como sostienen algunos? En todo caso, a nosotros nos interesa el valor científico del concepto, no sus supuestas virtudes políticas. Y no nos parece que el diccionario sea una buena base para la formación de conceptos, que deben surgir del proceso científico mismo. Adaptarlo para que sirva como instrumento de lucha política tampoco es un buen método científico: Izaguirre y su equipo parecen creer que la conceptualización de genocidio es buena porque “ayuda a la lucha”. Lo que hay que preguntarse es ¿a cuál lucha? Y respondemos: a la que las fracciones “progresistas” de la burguesía imperialista lleva adelante para sacar del escenario a personajes impresentables. Así, el nazismo no es un emergente necesario e inevitable del capitalismo, ni sus crímenes una necesidad del proceso de acumulación. Se trata de “crímenes atroces y aberrantes” (¿hay algún crimen que no lo sea?) y de “lesa humanidad” (¿hay alguno que no lo sea?), que deben ser juzgados por la misma justicia burguesa que miró para otro lado, convenientemente, mientras se cometían. Así, olvidémonos del capitalismo y juzguemos a Goebbels, Videla, Pinochet y otros perejiles. El resultado es paradójico: el mismo enemigo que destruyó a los combatientes a los que se trata de sacar del olvido es el que forma los conceptos con los cuales Izaguirre y su equipo pretenden descubrir la realidad que ellos ocultaron convenientemente. Por esa vía han entrado en

⁹Aunque una lectura atenta de Feierstein, Daniel: *Seis estudios sobre genocidio*, Eudeba, Bs. As., 2000, hace pensar seriamente acerca en qué medida ayuda a entender el proceso real de aniquilamiento de masas



la trampa del imperialismo casi todos los organismos de derechos humanos, incluyendo a Madres de Plaza de Mayo línea Bonafini.

b. El método de trabajo

Dijimos que iniciamos nuestra investigación dando por buenos los resultados obtenidos por Izaguirre y su equipo. Este intercambio ha tenido la virtud de obligarnos a repasar los textos que nos sirvieron de base a la formulación de hipótesis. Pero, paradójicamente, la conclusión a la que arribamos es que varios de esos textos están construidos de una manera que echa sombras sobre sus conclusiones. En particular, resulta preocupante la forma en que incluyen en la clase obrera categorías que no corresponden (profesores, maestros y estudiantes que trabajan), la exclusión de datos por uso de categorías burguesas (los estudiantes, las amas de casa, los jubilados) y la superficial consideración de los alineamientos políticos de la clase obrera.

Amas de casa, estudiantes y jubilados

Entre las muchas decisiones metodológicas que el equipo de Izaguirre tomó a lo largo de su investigación, hay una que vale la pena examinar con detalle. En el momento de realizar una aproximación a clases sociales en el conjunto de los detenidos desaparecidos, se decide tomar las categorías de la PEA (Población económicamente activa) a fin de poder comparar el peso de cada fracción en la fuerza con su peso en el conjunto de la sociedad. Esa decisión metodológica tiene consecuencias graves a la hora de calibrar el contenido de clase de la fuerza. ¿En dónde está el problema? En aceptar la primera división que establece la PEA entre población activa y la no activa. La PEA es una simple clasificación profesional, de modo que cuando uno quiere convertir categorías profesionales a clases debe tener en cuenta que los “no activos” y otras categorías especiales deben ser objeto de tratamiento especial.¹⁰ De lo contrario, quedan excluidos como si no pertenecieran a ninguna clase. Izaguirre y equipo cometen este error.

Así, en su primer trabajo, Izaguirre deja afuera 54 casos de no activos (amas de casa, jubilados y estudiantes), el 8% del total de una muestra total de 674 casos de prisioneros desaparecidos denunciados. Izaguirre aclara con respecto a la participación de las mujeres que “su tributo proporcionalmente mayor lo rindieron como amas de casa: el 44% de los “no activos” desaparecidos son mujeres”. Quiere decir que para Izaguirre, todas las mujeres que no trabajan son “amas de casa”. Además de que no se sabe de qué casa son “amas”, se excluye la posibilidad

bajo el nazismo y en qué medida lo oscurece.

¹⁰Véanse los artículos de Ricardo Donaires (“Acercamiento empírico al reclutamiento de los docentes”, en *PIMSA*, Bs. As., 2001 y “Aproximación a la situación de los profesionales y los técnicos”, en *PIMSA*, Bs. As., 2004) como ejemplo de la necesidad de este tratamiento diferencial.



de que fueran estudiantes. De todos modos, la magnitud de las exclusiones no parece que signifiquen un cambio muy brusco en las cifras generales. Sin embargo, en una contabilidad más actual (a mayo de 2004), los excluidos de la cuenta suman 1778, sobre un total de 5364. Es decir, el 33% de la muestra ha sido excluida de la cuenta porque en la PEA figurarían como “no activos”. El resultado es que un tercio de la muestra no pertenece a ninguna clase. Pero Izaguirre declara la mayoría es estudiante. ¿Es imposible ubicar en alguna clase a los estudiantes universitarios que no trabajan? Veamos el trabajo en el que Pablo Bonavena intenta una aproximación a clase social de los estudiantes desaparecidos.¹¹

Bonavena elabora el siguiente cuadro:

Indicadores de la inserción social de los estudiantes universitarios y terciarios desaparecidos	
Compra o venta de fuerza de trabajo	Aproximación a fracción de clase social
Propietarios de capital 3 Compra FT Funcionarios del capital 3	Clase burguesa
Ni compra ni vende 36	Pequeña burguesía
Manual 149 Vende FT No manual 591 Otra situación 3	Clase obrera
Subtotal 785 No trabaja/sin datos 758	
Total	

¹¹Bonavena, Pablo:“El movimiento estudiantil en la década del ‘70: un ejercicio de contabilidad de bajas”, en Irma Antognazzi y Rosa Ferrer (comp.): *Del Rosario a la democracia del ‘83*, UNR, 1995



1543

A simple vista se observa que los estudiantes clasificados como clase obrera son mayoritarios con respecto a los que pertenecen a la pequeña burguesía. El autor aclara que “al momento del secuestro” trabajan 785 estudiantes, de un total de 1543 casos de estudiantes universitarios y terciarios desaparecidos, es decir el 51% de la muestra. Bonavena, como Izaguirre, para “facilitar” la comparación con la PEA, decide no incluir las categorías que en la PEA figuran como “no activos”. Así, quedan fuera de la contabilidad los estudiantes que declaran no trabajar.¹² Esa decisión metodológica da por resultado que los estudiantes (como las amas de casa y los jubilados) que no trabajan, no pertenecen a ninguna clase. O sea, la mitad del universo bajo estudio ha sido borrado de la cuenta aunque es dable pensar que un estudiante universitario que no trabaja probablemente pertenezca a familias con un poder adquisitivo relativamente elevado. Y que bastaría con revisar algunos datos sobre la composición social de los estudiantes universitarios en los años ’70, para tener una idea de dónde ubicar esa masa de datos. Como se excluye esta posibilidad, el resultado no puede ser otro que transformar a la masa de los estudiantes universitarios en dos categorías: clase obrera o nada. Peor aún es el tratamiento superficial de los “estudiantes que trabajan”. Al no especificar el trabajo que realizaban estos estudiantes, no queda claro si pueden ser considerados realmente obreros. Esta salvedad parece menor, pero estudiantes que trabajan cuatro horas para pagarse apuntes no son obreros. Ambos son asalariados, pero no necesariamente “clase obrera”. Muchos estudiantes no venden su fuerza de trabajo para reproducirse. Su existencia no depende del trabajo que realizan sino de la estructura familiar que los mantiene, de modo que un simple análisis de procedencia permitiría ubicarlos en alguna clase, aunque más no sea por aproximación.

Así, excluyendo a los que no trabajan y contabilizando como obrero a todo estudiante que dice trabajar, Bonavena llega a la fabulosa cifra de 740 estudiantes-obreros sobre un total de 785, lo que arroja un 94,3% de “obreros” en el seno del estudiantado. Un porcentaje tan elevado de estudiantes obreros, que supera por lejos la representación pequeño burguesa en el conjunto de la población universitaria, debiera haber hecho reflexionar al compañero acerca de la corrección de sus cifras, puesto que la imagen que ofrece es la de una universidad de masas proletarias. Salvo que uno crea que la PEA es sagrada y que es el *non plus ultra* de la metodología marxista, es necesario superar sus límites.

Un somero estudio a la población universitaria de Córdoba y Buenos Aires, ofrece otra perspectiva. Sólo a modo de ejemplo, hemos preparado un apéndice en el que se examinan las características de la población universitaria, sin pretender constituir un estudio definitivo.

¹²Izaguirre, Inés: *Los desaparecidos...*, op. cit. p. 48.



Mientras las cifras y el análisis más detallado pueden verse en dicho apéndice, adelantamos que sólo un pequeño porcentaje de los estudiantes *que trabajan* puede considerarse obrero, porcentaje que, siendo generosos, no supera el 25% del total nacional, aún incluyendo en la cuenta categorías que portan relaciones pequeño burguesas casi con seguridad. Resultaría curioso que los únicos estudiantes que militaron y luego desaparecieron, salieran exclusivamente de ese estrato más que reducido (si ello fuera así, habría que dudar de la otra virtud que Izaguirre et al. adjudican a la fuerza revolucionaria: su capacidad para formar alianzas). Hay que tener en cuenta, además, que estudiar, trabajar y militar son normalmente actividades excluyentes y no complementarias. O en los '70 la duración del día tenía más de 24 horas, o las cifras subestiman seriamente la participación de la pequeña burguesía en la fuerza revolucionaria.

La conflictividad obrera durante el período '73-'76.

Inés Izaguirre y Zulema Aristizábal analizan las luchas obreras durante el período 1973-76 con el objetivo de conocer cuáles fueron las fracciones obreras que se alinearon detrás de cada una de las conducciones de cada fuerza social.¹³ Para responder a esta cuestión tomaron un indicador específico, las “luchas obreras”, relevadas desde fuentes periodísticas. Sobre esto las autoras escriben: “Dicha investigación propone una metodología original de construcción y análisis de los datos, basada en la codificación de material periodístico con el modelo teórico de la guerra y que ubica en los encuentros sus unidades mínimas de confrontación.” Dada la desaparición de estadísticas sobre conflictos obreros en la década del '70, las autoras se proponen construir un registro que sirva de “soporte empírico de la investigación.” Los diarios representan para cualquier investigador un registro de orden real, aunque no por esto libre del carácter ideológico que le aplica el escritor de las noticias. Por esta condición las autoras eligen como diario modelo *El Cronista Comercial*, el cual reúne una importante cantidad de información gremial.

Más allá de una serie de observaciones metodológicas y teóricas acerca de cómo estudiar los conflictos, observaciones que tienen un indudable valor y recomendamos a todos los que se internen en estos problemas, nos interesa cuestionar la metodología para la construcción de los datos. ¿Cómo se hizo el relevamiento de dicha información presentada en estos diarios? El primer problema es la simplificación de las fuentes: se toma un solo diario. Las autoras explican que, dada la magnitud del material a revisar y la necesidad de mantener la homogeneidad del registro, era impracticable abarcar más de una fuente. Sin embargo, recordemos que se trata de menos de tres años y que el trabajo fue realizado con un equipo de investigación en el que se enumeran más de diez personas... Como si esa simplificación no fuera ya suficiente, las autoras, amparándose en la misma excusa de la magnitud del material a trabajar, en lugar de revisar todos

¹³Izaguirre, Inés y Zulema Aristizábal: *Las luchas obreras...*, op. cit.



los días del diario, se limitan a uno sólo, el viernes, que parece ser el “día resumen” de la semana. ¿Cómo se obtiene el total de conflictos del período? Se multiplica por 4 el total del día viernes. ¿Por qué por 4 y no por 7? Porque las autoras y su equipo se basan en un trabajo que contabilizó todos los conflictos del año 1975 y encuentran que su registro de ese año equivale al 25% del total. El viernes es, entonces, un día de mayor intensidad o de mayor registro de conflictos que otros, por lo cual, multiplicar por 7 sería sobredimensionar el fenómeno. De esta forma consiguen un porcentaje semanal de conflictos obreros, a partir de la información de un solo día. Sobre esta base innecesariamente endeble (en menos de dos meses, tres de nosotros revisamos todo el diario *Clarín* entre enero de 1975 y marzo del '76), las autoras extraen una serie de conclusiones sobre la conflictividad del período. El punto más importante es el que examina los alineamientos que se observan en los conflictos. Allí se concluye que “las personificaciones de la clase obrera, en particular los dirigentes medios, los delegados y los trabajadores mismos, aunque también las dirigencias, en ese orden, se alinearon consecuentemente en acciones favorables a la fuerza revolucionaria, y que **el alineamiento contrarrevolucionario es prácticamente inexistente entre los trabajadores**” (subrayado en el original).

¿Cómo se obtiene esta conclusión? Por el análisis de los “pronunciamientos pro-revolucionarios”. ¿Qué son los alineamientos pro-revolucionarios? Todas las expresiones dirigidas a afirmar toda conducta obrera autónoma o disidente, incluyendo los “pronunciamientos contra el PEN”. Las autoras dudan de todas las conductas incluidas en la categoría “pronunciamientos pro-revolucionarios”, porque admiten que “la denominación elegida” puede ser “discutida”, pero “la realidad indica que esa era una expresión corriente en la Argentina de la época”. Así se transforman en “pro-revolucionarias” expresiones de todo tipo sin mayor fundamento que el clima de la época. Para eso no hacía falta revisar 209 periódicos entre quince personas. Bastaba con mucho menos. Bastaba con expresar abiertamente los prejuicios del investigador.

Conclusión

Comenzamos el artículo mencionando que la respuesta elaborada por los investigadores del proyecto dirigido por Izaguirre, nos resultaba una crítica injusta y una agresión gratuita. En primer lugar porque no se refirieron específicamente a la problemática planteada en nuestro artículo. En segundo lugar, nos tratan de ignorantes por haber cometido el más grave error que puede cometer un investigador: no hacer pleitesías ante la producción escrita por quienes dominan el campo. La discusión podría haber terminado allí, con un llamado a la cordura a compañeros excesivamente sensibles. Pero *nuestra* interpretación de *sus* datos cuestionó la



caracterización que realizaron de la fuerza revolucionaria. En esta respuesta hemos querido, no sólo defender nuestra interpretación, sino demostrar que las falencias teóricas y metodológicas del equipo de Izaguirre la hacen más plausible todavía y que una investigación seria está todavía por hacerse.

El problema real es si la caracterización de la fuerza revolucionaria es la que ofrecen los compañeros o si hay elementos para pensarla de otra manera. ¿Se trata de una fuerza que expresaba una alianza con mayoría obrera, con un consenso notable en el conjunto de la sociedad, o de una que, por el contrario, no había logrado desarrollarse mucho más allá de los destacamentos más activos de la pequeña burguesía y el proletariado que se encontraba aislada de las grandes masas de la clase obrera?

Nosotros concluimos que la caracterización que hace Inés Izaguirre, y su equipo de investigadores, acerca de la fuerza social aniquilada, es incorrecta: por la vía de una categorización errónea y de decisiones metodológicas equivocadas se magnifica la presencia de la clase obrera en la fuerza revolucionaria. En consecuencia, la segunda opción merece ser explorada con detalle.

Apéndice

Condición de clase de los estudiantes universitarios en la década del ‘70: ¿Universidad de masas proletarias?

Como forma de aproximación a la condición de clase de los estudiantes universitarios en los años ’70, recurrimos a dos censos universitarios, ambos del año 1968, uno de la Universidad de Buenos Aires (*Censo de alumnos 1968*, UBA, Bs. As., 1968) y otro de la Universidad de Córdoba (*Censo del sector Alumnos*, UNC, Córdoba, 1968). Por esa fecha, la UBA tenía 79.640 estudiantes matriculados, mientras Córdoba alcanzaba a 26.850. Suman ambas 106.490, cifra más que suficiente para poder extraer conclusiones a escala nacional.

Los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires

Los datos más significativos para hacer un aproximación a la composición de clase de los estudiantes universitarios de la UBA son, en primer lugar, la cantidad de estudiantes que no trabajan (lo que permite inferir que provienen de hogares burgueses o pequeño-burgueses, los más capaces de sostener a un estudiante y sus gastos de estudio). El porcentaje de estudiantes que declaran no tener otra ocupación que estudiar, con o sin beca, es de 28,4 (Cuadro I). Los que



declaran no trabajar, específicamente, son el 29,6% (Cuadro II), mientras que los que lo hacen a tiempo parcial (mañana, tarde o noche), son 25,3%. En total, 54,9% de los estudiantes de la UBA no reproducían su vida como fuerza de trabajo, si se entiende como medida de tal una jornada necesaria equivalente a la media normal (ocho horas al día, 40 a la semana). Si observamos la cantidad de horas trabajadas por los estudiantes que trabajaban, veremos que sólo el 30% del total (incluyendo a los que no trabajaban) llega a trabajar más de 37 horas semanales (Cuadro III). No parece abusivo concluir que cerca del 70% de los estudiantes de la UBA no se reproducían como fuerza de trabajo.

Esto no nos dice, todavía, de qué trabajaban los estudiantes que trabajaban. De los datos del censo (Cuadro IV) se desprende que sólo un 0,5 % son obreros calificados o no calificados y un 15,4 % empleados no calificados. Éstas son las únicas categorías que podríamos encuadrar sin problemas dentro de la clase obrera: tan sólo un 15,9 %. Salvo la categoría *Empleados de calificación técnica o universitaria*, que hay que desglosar, el resto entra en la pequeña burguesía o la burguesía, ya que corresponden a pequeños propietarios, patrones o personal gerencial, que sumarían un 84,6%. Cifra tal vez excesiva ya que entre los “empleados de calificación técnica o universitaria” puede incluirse un componente importante de obreros (aunque también asalariados provenientes de la pequeña burguesía, como profesores y maestros). Para no forzar las cifras, incluimos esta categoría junto con las correspondientes a clase obrera, llegando a un total de 40,5%. Una cifra más realista, sin embargo, podría rondar el 30%, sobre todo si se tiene en cuenta que cuando se observa la procedencia familiar de los estudiantes, el 76% proviene de hogares cuyo padre puede ser ubicado como burgués o pequeño burgués, excluyendo entre ellos a los “empleados de calificación técnica o universitaria” (Cuadro V).

En conclusión, no parece violentar la realidad sostener que una cifra probablemente mayor al 70% de los estudiantes de la UBA pertenecía o a la burguesía o a la pequeña burguesía, siendo este un cálculo conservador.¹⁴

Los estudiantes de la Universidad de Córdoba

Las categorías del censo cordobés son distintas de las del de la UBA, al mismo tiempo que aparecen desagregados, situación que nos obligó a organizar los datos de una manera distinta de la que figura en la fuente. Además, el censo presenta gran cantidad de errores muestrales, algunos de importancia. En los casos en que fue posible, los errores se corrigieron.

El censo cordobés arroja resultados que avalan la conclusión anterior incluso con más fuerza. Empezando por la ocupación, el 62,6% no trabaja. El resto lo hace en condiciones de burguesía o



pequeña burguesía (6,1%) o de obrero (30,5%). Esta última cifra es completamente excesiva, en tanto sólo excluye a los que no trabajan, a los profesores secundarios y/o universitarios, a los profesores universitarios, a los profesionales independientes no universitarios y a los comerciantes e industriales. De modo que incluye hasta los que no contestan, para evitar un cálculo que vuelque demasiado las cifras hacia la pequeña burguesía (Cuadro VI). La idea de que una cifra superior al 70% es claramente pequeño-burguesa o burguesa, se refuerza cuando se observa la fuente de ingresos de los estudiantes (Cuadro VII): el 64,4% recibe ayuda familiar y sólo el 29,6% obtiene sus ingresos de su trabajo. Conclusión que se hace más firme cuando se mira la distribución ocupacional del padre: sólo el 23,3 (incluyendo a los empleados de calificación técnica o universitaria) es de extracción obrera. Si excluimos a los empleados de calificación técnica o universitaria, ese porcentaje baja aún más: 11,9%.

Si tomamos en consideración ambos casos, y teniendo en cuenta el carácter conservador de las cifras, la idea de que más de un 70% de los estudiantes universitarios argentinos pertenecía a la burguesía o a la pequeña burguesía parece estar bien fundada.

¹⁴Un texto ajeno a nuestra perspectiva teórica, ofrece cifras similares. Véase Klubitschko, Doris: “El origen social de los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires”, en: *Fichas/9*, Proyecto DEALC, PNUD, CEPAL, Bs. As., septiembre de 1980.